

**ANTECEDENTES**

- I. Que mediante Resolución número 270/2018, de fecha 08 de octubre de 2018, el Comité de Transparencia confirmó la clasificación como reservada de la información consistente en el "Acta de inspección número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010/2018** contenida en el expediente administrativo número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**" por el periodo de un año, de conformidad con lo dispuesto en la parte Considerativa de dicha Resolución, por los motivos mencionados en el oficio número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/0383/2018**, emitido por la **DGSIVEERC**, lo anterior con fundamento los artículos 113, fracción VI y 101 de la LGTAIP; 110, fracción VI y 99 de la LFTAIP.

- II. Que por oficio número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/0388/2019**, de fecha 30 de septiembre de 2019, recibido el 01 de octubre del mismo año, la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales (**DGSIVEERC**) adscrita a la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial (**USIVI**), informó al Presidente del Comité de Transparencia lo siguiente:

"...

Hago referencia al oficio identificado como **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/0383/2018** del 28 de septiembre del 2018, mediante el cual, la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales, con la finalidad de que el mencionado Comité que preside, se encontrará en posibilidad de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la información realicen los Titulares de las Áreas de esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, bajo los supuestos de reserva o confidencialidad a efectos de dar cumplimiento a la obligación de transparencia establecida en el artículo 70 fracción XXXVI de la LGTAIP y el artículo 73 fracción I, incisos T y X de la LFTAIP, remitió y aportó los razonamientos que fundan y motivan las secciones reservadas y confidenciales de diversas versiones públicas, de entre las cuales se ubica el acta circunstanciada identificada como:

A) ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010/2018

Al respecto, mediante Resolución Administrativa **270/2018** del **8 de octubre del 2018**, el Comité de Transparencia que tiene a bien presidir, aprobó la clasificación de información como reservada del acta circunstanciada identificada como **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010/2018** por un



periodo de 1 año, el cual comprende del **8 de octubre del 2018 al 7 de octubre del 2019**.

En ese orden de ideas, toda vez que al día de hoy, se considera necesario someter a la aprobación del Comité de Transparencia la reserva de la información contenida dentro del acta circunstanciada **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010/2018**, en razón de que no hay cambio de estado procesal en el que se encuentra el expediente administrativo abierto con base a los hechos y omisiones circunstanciados por los Inspectores Federales comisionados durante la visita de inspección; en este acto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 110 fracciones XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los artículos Trigésimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que son aplicables a la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se solicita la reserva de las siguientes secciones señaladas por un periodo de tres años, bajo los siguientes razonamientos que fundan y motivan las secciones reservadas del acto que nos ocupa.

- A. Acta de Inspección** número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010/2018**, en la cual obran los hechos y omisiones observados por los Inspectores Federales comisionados, durante la Visita de Inspección realizada a la empresa **SOLUCIONES AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., ubicada en el predio situado en la fracción "D" del predio Encino Gordo, camino a la Industria Fenoquímica, colonia Cosoleacaque, municipio Cosoleacaque, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, en cumplimiento a la Orden de Inspección número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/OI/0010/2018** y con base en la cual se aperturó el siguiente expediente administrativo:

No.	Expediente	Regulado	Estado Procesal
1	ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018	SOLUCIONES AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Impugnado

En este sentido, como se mencionó, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 fracciones XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en los artículos Trigésimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de



Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que son aplicables a la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se solicita la reserva de las siguientes secciones señaladas:

- A. Del **acta de inspección** identificada como **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010/2018**, las fojas **3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10**, por estar íntimamente relacionadas con los procedimientos de inspección contenidos en los artículos 101 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 161 al 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por el periodo de tres años, toda vez que el expediente que contiene el acta referida está en trámite, es decir, se encuentra pendiente de determinar.

Respecto al Acta, es de señalar que la misma forma parte esencial del procedimiento administrativo sancionatorio abierto a nombre de la empresa **SOLUCIONES AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.** con el número de expediente **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/0010-2018** y, en ese sentido, la información contenida en la misma, es parte de las constancias del mismo, destacando que el expediente al día de hoy **se encuentra pendiente, toda vez que se encuentra impugnado mediante Juicio Contencioso Administrativo, el cual está pendiente de resolver por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, está en trámite**, lo anterior cobra importancia en virtud de que la resolución que recaiga a dicho Juicio puede modificar o revocar la resolución administrativa del procedimiento de origen, emitida por la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; asimismo se menciona que se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio.

Una vez precisado lo anterior, al día de hoy no es dable proporcionar el Acta de Inspección mencionada, más que en versión pública, toda vez que la misma es parte y contiene información contundente para la resolución definitiva y firme del expediente administrativo sancionatorio, el cual, como se ha reiterado aún no ha causado estado, en razón de que el Juicio Contencioso Administrativo está pendiente de resolverse; por lo que de conformidad con los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Dirección General reserva diversas secciones del Acta de Inspección, mismas que se someten a su consideración.

Para pronta referencia se citan los artículos señalados:



- **Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

"**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

(...)

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;"

- **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

"**Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

(...)

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Mismos que refieren que se considera reservada **toda aquella información que transgrede la conducción de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, hasta en tanto no hayan causado estado.**

Y toda vez que el expediente administrativo **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/0010-2018**, se trata de un procedimiento administrativo en curso seguido en forma de juicio, el cual está pendiente de resolverse definitivamente, por lo que **aún no ha causado estado**, resulta evidente que en el presente caso se actualiza la causal de reserva prevista tanto en la fracción XI del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y como en la fracción XI del diverso 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para la información testada.

Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis que se cita a continuación:

Registro: 228889

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989

Materia(s): Administrativa, Común

Tesis:

Página: 579

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO.

**RESOLUCIÓN NÚMERO 652/2019 DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS (ASEA)**

De conformidad con el texto de la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, será procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales administrativos o del trabajo, pero, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. Por procedimiento administrativo hemos de entender aquella secuencia de actos, realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado. Ahora bien, este proceder ordenado y sistematizado puede ser activado, ya de manera oficiosa por la propia administración, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos vigentes, o a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa. Cuando los particulares eleven una petición a la administración, misma que requiere, para ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de etapas, subsecuentes una de otra hasta la obtención de un resultado final, hemos de entender que se está en presencia de un procedimiento administrativo constitutivo o formal. Por el contrario, cuando ya existe una determinada resolución administrativa, misma que afecta a un gobernado en lo particular y éste manifiesta una inconformidad ante la autoridad responsable del acto, estaremos en presencia, también, de un procedimiento administrativo, pero ya no constitutivo o formal, sino de control, en el que, siguiéndose las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional (oportunidad defensiva y oportunidad probatoria), ha de concluir, precisamente, con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; esto es, se habrá agotado, específicamente, un recurso administrativo. Precisamente es esta segunda connotación aquella a que se refiere el género de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, al autorizar la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito en aquellos casos en que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, permitiéndolo sólo contra la resolución definitiva que al efecto se dicte. Así, el llamado procedimiento administrativo constitutivo o formal, es decir, la serie de trámites o cumplimiento de requisitos exigidos para la realización de un acto administrativo se diferencia, naturalmente, del procedimiento administrativo recursivo que busca tutelar, por la vía del control, los derechos o intereses particulares que afecte, o pueda afectar, un acto administrativo; de ahí que en observancia de la garantía de seguridad jurídica contenida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, deba sustanciarse en forma de juicio, observando las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, es indispensable tener presente que, tal y como se ha sostenido, el procedimiento administrativo no se agota en la figura meramente recursiva, es decir, en el empleo de los medios tendientes a posibilitar la impugnación, por los afectados, de los actos administrativos que los agravan; por el contrario, el procedimiento administrativo se integra, de igual modo, con aquellas formalidades que están impuestas para facilitar y asegurar el desenvolvimiento del accionar administrativo, aun en ausencia de la participación del gobernado y que



concluyen, preponderantemente, en la creación de actos administrativos cuyo objeto y finalidad podrán ser los más diversos. Así, en uno y otro caso, la resolución final concluirá con el procedimiento administrativo iniciado, sea éste de naturaleza constitutiva (creación de acto de autoridad) o de naturaleza recursiva (revisión del ya existente) esta resolución, para ser combatida a través del ejercicio de la acción constitucional, precisa ser definitiva, esto es, inatacable ante la potestad administrativa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 463/89. Tijuana FM, S.A. 7 de marzo de 1989.
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Secretario: Alberto Pérez Dayán.

Por lo anterior, es pertinente mencionar que en cumplimiento a las garantías de legalidad y debido proceso, que obligan el actuar de este Órgano Desconcentrado como Autoridad Federal, mismos que son inherentes a todos los procedimientos administrativos y actos de autoridad, de conformidad con los artículos 14 y 16 constitucionales; se advierte que la afectación de dar a conocer la información que obra en el expediente, como lo son los actos y omisiones circunstanciados por los Inspectores Federales en la Acta de Inspección, antes de la determinación final de la autoridad, constituiría una violación a la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento, lo que podría traer como consecuencia la nulidad de las actuaciones de esta autoridad, evitando así con la obligación de esta autoridad para velar por el derecho humano de protección al medio ambiente sano.

Ahora bien, en observancia a lo previsto en la normativa aplicable a la materia de transparencia y a efecto de dar cumplimiento a la misma, se señala lo siguiente:

Que el Lineamiento Trigésimo del "Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.", prevé:

"Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada**, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y



II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia; y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

De lo antes señalado, en el caso que nos ocupa, se acreditan dichos elementos:

- El expediente aperturado con motivo de la Visita de Inspección realizada el día veinticinco de junio del dos mil dieciocho, circunstanciada en el Acta número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010-2018**, al cual le recayó el número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, se encuentra impugnado mediante Juicio Contencioso Administrativo, el cual es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio materialmente jurisdiccional, mismo que se encuentra en trámite, por lo que en consecuencia el procedimiento administrativo, no ha causado estado; y
- Que la información que obra en el expediente antes referido, se trata de actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento administrativo instaurado por esta Dirección General, de las que resaltan los actos y omisiones circunstanciados por los Inspectores Federales actuantes durante la visita y que obran circunstanciados en la Acta de Inspección.

Por lo antes señalado, se advierte que la información descrita, misma que forma parte de la Acta de Inspección, y en consecuencia del expediente administrativo número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/0010-2018**, es reservada, en virtud de que como se ha puntualizado es un procedimiento en el que el Superior Jerárquico de esta Dirección General, se encuentra sustanciando la legalidad del mismo, con la finalidad de emitir una resolución definitiva que impactara de forma directa al procedimiento administrativo llevado a cabo por esta Dirección General, al poder modificar o revocar la



determinación que se emitió, por lo que al reservar la información hasta en tanto el procedimiento administrativo original no cause estado, prevé el cumplimiento cabal de las formalidades esenciales del procedimiento.

Asimismo, el artículo 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevé que las causales de reserva previstas en el artículo 110 de la misma Ley, se deberán fundar y motivar mediante la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual prevé lo siguiente:

"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio."

Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo citado con antelación, respecto a la aplicación de la prueba de daño es de señalar lo siguiente:

Respecto a lo previsto en la fracción **I**, es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º reconoce como derecho humano el medio ambiente sano como elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, el cual tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general.

En este sentido, el publicar la Información que obra en el Acta de Inspección, la cual contiene los actos y omisiones materia y objeto del expediente administrativo pendiente de resolver en definitiva, por las consideraciones que en derecho ya se mencionaron, y que fue abierto a nombre de la empresa **SOLUCIONES AMBIENTALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.**, con el número de expediente **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, representaría un **riesgo real**, ya que se podrían vulnerar las formalidades esenciales del debido proceso en el trámite del Juicio Contencioso Administrativo y, en consecuencia la del procedimiento de origen aperturado en esta Dirección General.



El **riesgo demostrable**. Al respecto se advierte que, al darse a conocer parte de las actuaciones del referido expediente, como serían los actos u omisiones observadas por los Inspectores Federales durante la visita y que están inmersos en la Acta de Inspección, vulneraría la determinación que el Superior Jerárquico de esta Dirección General pudiera tomar, en relación a la legalidad del procedimiento administrativo de origen.

Por último, respecto al **riesgo identificable** es que esta autoridad al ver vulnerada la posible determinación que se tome en el expediente de cuenta vería menoscabada su potestad para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona el cual es significativo al interés público.

Ahora bien, respecto a lo previsto en la fracción **II** del artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se reitera que publicar las constancias y actuaciones del expediente administrativo número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, conlleva un riesgo de perjuicio a la potestad que tiene esta autoridad para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente apropiado para el óptimo desarrollo y bienestar de la colectividad, consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial:

Época: Décima Época

Registro: 2012127

Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro 32, Julio de 2016, Tomo III

Materia(s): Constitucional, Común

Tesis: I.7o.A. J/7 (10a.)

Página: 1802

DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA EFICACIA EN EL GOCE DE SU NIVEL MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.

La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se acompaña de conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subyacen tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados. Así, el medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación de la especie



humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; por esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad, pues la salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 95/2016. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 18 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: Alejandro Lucero de la Rosa.

Queja 98/2016. Israel Mercado García. 20 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretario: Carlos Ferreira Herrera.

Queja 99/2016. Isabel Isela Marín Pérez. 20 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Ismael Hinojosa Cuevas.

Queja 105/2016. Ricardo Moreno García. 27 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Queja 108/2016. Jorge Alejandro Bayona Sánchez. 2 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretaria: Martha Izalía Miranda Arbona.

Por otra parte, en relación a la fracción **III** del multicitado artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, al respecto, y toda vez que el procedimiento aperturado en el expediente que nos ocupa, aún se encuentra pendiente de resolver en definitiva, en razón de que está pendiente de resolverse el Juicio Contencioso Administrativo, y por ende **no ha causado estado**, resultaría desproporcional al interés público el divulgar la información.

Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio emitido por los Tribunales Colegiados, el cual dicta que:

Época: Décima Época

Registro: 2006299

Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro 5, Abril de 2014, Tomo II



Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: I.Io.A.E.3 K (10a.)
Página: 1523

INFORMACIÓN RESERVADA. APLICACIÓN DE LA "PRUEBA DE DAÑO E INTERÉS PÚBLICO" PARA DETERMINAR LO ADECUADO DE LA APORTADA CON ESA CLASIFICACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A EFECTO DE HACER VIABLE LA DEFENSA EFECTIVA DEL QUEJOSO.

Una adecuada clasificación de la información pública debe tomar en cuenta y distinguir, en el contexto general de un documento, cuál es la específica y precisa, cuya divulgación puede generar un daño desproporcionado o innecesario a valores jurídicamente protegidos, lo cual debe evitarse, en la medida de lo posible, frente a aquella que debe ser accesible al quejoso en el amparo para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar violaciones a derechos fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o desclasificar la información necesaria para ese efecto, cuando la autoridad responsable que la aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tanto, es necesario distinguir esas diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información, generando así una regla individualizada y pertinente para el caso, a través de aplicar la "prueba de daño e interés público" ex officio, con el propósito de obtener una versión que sea pública para la parte interesada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Queja 16/2013. Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V. y otro. 13 de febrero de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario:
Agustín Ballesteros Sánchez.

Finalmente, en relación a la aplicación de la prueba de daño establecida en los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas." la cual dispone lo siguiente:

"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando



corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;

II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;

III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

En atención al punto del Lineamiento transcrito, es relevante demostrar que la reserva de la información de mérito se encuentra apegada a lo dispuesto en el mismo, en razón de lo subsecuente:

- En el caso que nos ocupa es la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concatenación con el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, los preceptos que prevén el supuesto por el cual se podrá reservar como clasificada la información contenida en el expediente administrativo **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, tal como se detalló en párrafos anteriores.
- En la ponderación de los intereses en conflicto, se indica que el hacer públicas los actos u omisiones observados por los Inspectores Federales durante la vista mismos que fueron asentados en la Acta de Inspección, constancias que obran en el expediente administrativo **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, generaría un riesgo de perjuicio a la potestad que tiene la Agencia, salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente apropiado para el óptimo desarrollo y bienestar de la colectividad.
- El vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado, es que al publicarse la información de mérito se podría vulnerar la determinación del Superior Jerárquico de esta Dirección



General, respecto a la resolución del procedimiento original, menoscabando la potestad de esta Agencia, en el ámbito de sus atribuciones, para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante acciones de supervisión, inspección y vigilancia en materia de residuos peligrosos.

- Tal y como se indicó en párrafos anteriores, el publicar la información que obra en el expediente administrativo que nos ocupa, generaría una afectación, advirtiendo los siguientes riesgos:

Riesgo real: Se podría vulnerar el debido proceso en el Procedimiento Administrativo que se encuentra aperturado en esta Dirección General a mi cargo, mismo que no ha causado estado, al estar pendiente de resolverse el Recurso de Revisión con el cual se impugno.

Riesgo demostrable: Se podría vulnerar la determinación del Superior Jerárquico de esta Dirección General, respecto a la resolución del procedimiento administrativo de origen.

Riesgo identificable: Se vería menoscabada la potestad de esta Dirección General, para ejecutar sus determinaciones a partir de que la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo aún no ha causado estado, de acuerdo a sus facultades conferidas en el artículo 31 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona el cual es significativo al interés público.

- Respecto a la motivación de la clasificación, es de indicar lo siguiente:

Circunstancias de modo: Al darse a conocer la información correspondiente al expediente administrativo que nos ocupa, es decir, los actos u omisiones observados por los Inspectores Federales durante la vista mismos que fueron asentados en la Acta de Inspección, constancias que obran en el expediente, se causaría un daño a la ejecución de la determinación tomada por esta Dirección General dentro del marco de sus atribuciones, respecto al cumplimiento de la resolución en relación a las infracciones a la normatividad ambiental, hasta en tanto no sea una resolución definitiva y firme, en otras palabras que cause estado.

Circunstancias de tiempo: Al encontrarse el expediente de mérito impugnado mediante Recurso de Revisión, resulta evidente que el mismo se encuentra pendiente de determinar y en consecuencia no ha causado estado, por lo anterior el daño ocurriría en el presente, toda vez que el mismo se encuentra en trámite.



Circunstancias de lugar: El daño se causaría directamente al procedimiento que, en el ámbito de sus atribuciones, lleva esta Dirección General con motivo de la visita de inspección.

- La solicitud de reserva de la información que contiene el expediente administrativo **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, precisando que es la referente a los actos u omisiones observados por los Inspectores Federales durante la vista, circunstanciados en la Acta de Inspección, se basa en el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano como elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, **el cual tiene carácter colectivo**, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general, el cual representa un interés superior y general frente al derecho a la información de un solo individuo.

En virtud de lo expuesto, se solicita al Comité de Transparencia confirmar la ampliación de la clasificación de la información que contiene el Acta de Inspección número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010-2018**, misma que forma parte del expediente administrativo número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/0010-2018**, como reservada, **por un periodo de tres años**, de conformidad con lo establecido en el artículo 65, fracción II, 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 103 y 113, fracción XI de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la misma no han causado estado, al encontrarse en trámite por parte de esta Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales." (sic)

CONSIDERANDO

- I. Que este Comité de Transparencia es competente para autorizar la ampliación del periodo de reserva de la información clasificada con tal carácter, que sometan a consideración los titulares de las Áreas de la **ASEA**, lo anterior en los términos que establecen los artículos 65, fracción VIII, 102 y 140, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 44, fracción VIII, 103 y 137, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

**Análisis de la ampliación de periodo de reserva.****Expediente Judicial.**

- II. Que el artículo 99, segundo y tercer párrafo de la LFTAIP y el artículo 101, segundo y tercer párrafo de la LGTAIP, establecen que la información clasificada como reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años, el cual correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. Así pues, excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.
- III. Que en el Lineamiento Trigésimo cuarto, tercer párrafo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril del 2016, también se establece que excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.
- IV. Que a través de la resolución número 270/2018, de fecha 08 de octubre de 2018, emitida por este Órgano Colegiado, fue aprobada la clasificación **por un año** de la información reservada contenida en el expediente administrativos **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, de conformidad con lo dispuesto en la parte Considerativa de la citada Resolución, lo anterior con fundamento los artículos 113, fracción XI y 101 de la LGTAIP; 110, fracción XI y 99 de la LFTAIP.
- V. Que mediante el oficio número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/0388/2019**, la **DGSIVEERC** informó al Presidente del Comité de Transparencia, que las causas que dieron origen a la clasificación de la información como reservada continúan vigentes, es decir, subsisten las causas por las cuales fue clasificado el expediente administrativo listado en el Considerando inmediato anterior de la presente resolución, ya que a la fecha se encuentra impugnado mediante Juicio Contencioso Administrativo, el cual es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio materialmente jurisdiccional, mismo que se encuentra en trámite, por lo que en consecuencia el procedimiento administrativo, no ha causado estado, por lo que la información debe mantener su carácter de reservada, lo anterior, con



fundamento en lo dispuesto en los artículos 99 y 110, fracción XI de la LFTAIP; 101 y 113, fracción XI de la LGTAIP.

- VI. Que el artículo 104 de la LGTAIP establece que en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
 - II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y,
 - III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
- VII. Que el artículo 110, fracción XI de la LFTAIP y el artículo 113, fracción XI de la LGTAIP, establecen que se podrá clasificar como información reservada aquella vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.
- VIII. Que el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas dispone que, de conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:

- a) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y
- b) Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurren los siguientes elementos:



1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y
 2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
- IX. Que el Trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, establece para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:
- a. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;
 - b. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;
 - c. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;
 - d. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
 - e. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y
 - f. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

Al respecto, este Comité considera que la **DGSIVEERC**, motivó y justificó la existencia de prueba de daño conforme a lo dispuesto en el numeral 104 de la LGTAIP, por los motivos y fundamentos que a continuación se detallan:



I. La **divulgación** de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional:

- ❖ La **DGSIVEERC** mencionó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º reconoce como derecho humano el medio ambiente sano como elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, el cual tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general.

En este sentido, el publicar la información que obra en el acta de inspección, la cual contiene los actos y omisiones materia y objeto del expediente administrativo pendiente de resolver **en definitiva**, por las consideraciones que en derecho ya se mencionaron, y que fue abierto a nombre de la empresa **SOLUCIONES AMBIENTALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.**, con el número de expediente **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, representaría un **riesgo real**, ya que se podrían vulnerar las formalidades esenciales del debido proceso en el trámite del Juicio Contencioso Administrativo y, en consecuencia la del procedimiento de origen aperturado en esa **DGSIVEERC**.

Asimismo, señaló que respecto al **riesgo demostrable**, se advierte que, al darse a conocer parte de las actuaciones del referido expediente, como serían los actos u omisiones observadas por los Inspectores Federales durante la visita y que están inmersos en la Acta de Inspección, vulneraría la determinación que el Superior Jerárquico de esta Dirección General pudiera tomar, en relación a la legalidad del procedimiento administrativo de origen.

Por último, respecto al **riesgo identificable** es que esta autoridad al ver vulnerada la posible determinación que se tome en el expediente de cuenta vería menoscabada su potestad para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona el cual es significativo al interés público.



II. El **riesgo** de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda:

- ❖ La **DGSIVEERC**, reiteró que publicar las constancias y actuaciones del expediente administrativo número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, conlleva un riesgo de perjuicio a la potestad que tiene esta autoridad para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente apropiado para el óptimo desarrollo y bienestar de la colectividad, consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. La **limitación** se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio:

- ❖ La reserva de información temporal que realiza la **DGSIVEERC**, representa sin lugar a dudas, representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, al respecto, y toda vez que el procedimiento aperturado en el expediente que nos ocupa, aún se encuentra pendiente de resolver, en definitiva, en razón de que está pendiente de resolverse el Juicio Contencioso Administrativo, y por ende **no ha causado estado**, resultaría desproporcional al interés público el divulgar la información.

Por otra parte, este Comité considera que la **DGSIVEERC** demostró los elementos previstos en el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, que quedaron acreditados como a continuación se indica:

- a. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite
 - El expediente aperturado con motivo de la visita de inspección realizada el día 25 de junio del 2018, circunstanciada en el acta número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010-2018**, al cual le recayó el número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, se encuentra impugnado mediante Juicio Contencioso Administrativo, el cual es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio materialmente jurisdiccional, mismo que se encuentra en trámite, por lo que en consecuencia el procedimiento administrativo, no ha causado estado.



- b. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.
- La **DGSIVEERC** señaló que la información que obra en el expediente antes referido, se trata de actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento administrativo instaurado por esa Dirección General, de las que resaltan los actos y omisiones circunstanciados por los Inspectores Federales actuantes durante la visita y que obran circunstanciados en la acta de inspección.

Finalmente, por lo que respecta, a lo establecido en el lineamiento Trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité considera que se acreditan los extremos que dispone por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando V de la presente Resolución, analizados a continuación:

- a. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;
- La **DGSIVEERC** invocó el supuesto normativo que expresamente le otorga a los expedientes administrativos de mérito, el **carácter de información reservada**, consistente en la fracción XI del artículo 113 de la LGTAIP, así como el Lineamiento Trigésimo, establecido en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
- b. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;
- En la ponderación de los intereses en conflicto, la **DGSIVEERC** indica que el hacer públicas los actos u omisiones observados por los Inspectores Federales durante la vista mismos que fueron asentados en la acta de inspección, constancias que obran en el expediente administrativo **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-**



2018, generaría un riesgo de perjuicio a la potestad que tiene la Agencia, salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente apropiado para el óptimo desarrollo y bienestar de la colectividad.

- c. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;
- El vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado, es que al publicarse la información de mérito se podría vulnerar la determinación del Superior Jerárquico de esa **DGSIVEERC**, respecto a la resolución del procedimiento original, menoscabando la potestad de esta Agencia, en el ámbito de sus atribuciones, para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente sano, mediante acciones de supervisión, inspección y vigilancia en materia de residuos peligrosos.
- d. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
- **Riesgo real:** La **DGSIVEERC**, advirtió que podría vulnerar el debido proceso en el Procedimiento Administrativo que se encuentra aperturado en esa Dirección General, mismo que no ha causado estado, al estar pendiente de resolverse el Recurso de Revisión con el cual se impugno.
- Riesgo demostrable:** Se podría vulnerar la determinación del Superior Jerárquico de esa **DGSIVEERC**, respecto a la resolución del procedimiento administrativo de origen.
- Riesgo identificable:** Se vería menoscabada la potestad de esa **DGSIVEERC**, para ejecutar sus determinaciones a partir de que la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo aún no ha causado estado, de acuerdo a sus facultades conferidas en el artículo 31 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona el cual es significativo al interés público.
- e. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y



- **Circunstancias de modo:** Al darse a conocer la información correspondiente al expediente administrativo que nos ocupa, es decir, los actos u omisiones observados por los Inspectores Federales durante la vista mismos que fueron asentados en la Acta de Inspección, constancias que obran en el expediente, se causaría un daño a la ejecución de la determinación tomada por esa **DGSIVEERC** dentro del marco de sus atribuciones, respecto al cumplimiento de la resolución en relación a las infracciones a la normatividad ambiental, hasta en tanto no sea una resolución definitiva y firme, en otras palabras que cause estado.

Circunstancias de tiempo: Al encontrarse el expediente de mérito impugnado mediante Recurso de Revisión, resulta evidente que el mismo se encuentra pendiente de determinar y en consecuencia no ha causado estado, por lo anterior el daño ocurriría en el presente, toda vez que el mismo se encuentra en trámite.

Circunstancias de lugar: El daño se causaría directamente al procedimiento que, en el ámbito de sus atribuciones, lleva esa **DGSIVEERC** con motivo de la visita de inspección.

- f. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.
- La **DGSIVEERC**, señala que la solicitud de reserva de la información que contiene el expediente administrativo **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, precisando que es la referente a los actos u omisiones observados por los Inspectores Federales durante la vista, circunstanciados en la acta de inspección, se basa en el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano como elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, **el cual tiene carácter colectivo**, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general, el cual representa un interés superior y general frente al derecho a la información de un solo individuo.

De lo anterior, se advierte que la **DGSIVEERC**, a través de su oficio número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/0388/2019** sometió a consideración de este



Órgano colegiado la aprobación de la ampliación del periodo de reserva del expediente administrativo número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, lo anterior, **por tres años adicionales**, toda vez que justificó, mediante la aplicación de la prueba de daño, que subsisten las causas que dieron origen a la clasificación de la información como reservada, ya que a la fecha dicho expediente constituye un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el cual aún se encuentra en trámite, razón por la cual, la información debe mantener su carácter de reservada; ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 110, fracción XI de la LFTAIP, 113, fracción XI de la LGTAIP.

Por lo anterior, este Comité estima procedente la **ampliación del periodo de reserva del expediente administrativo número ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018 listado en el Considerando IV hasta por tres años adicionales**, en virtud de que subsisten las causas que dieron origen a la clasificación de la información como reservada, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 113, fracción XI de la LGTAIP y el artículo 110, fracción XI de la LFTAIP, acorde a los elementos para la prueba de daño previstos en el artículo 104 de la LGTAIP y Trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Con base en lo expuesto en los Considerandos que anteceden, este Comité de Transparencia analizó la **ampliación del periodo de reserva** del expediente administrativo número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, que contiene el acta de inspección número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010/2018**, **hasta por tres años adicionales**, en virtud de que subsisten las causas que dieron origen a la clasificación de la información como reservada, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI de la LGTAIP y el artículo 110, fracción XI de la LFTAIP; acorde con los elementos para la prueba de daño previstos en el artículo 104 de la LGTAIP, Trigésimo y Trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Derivado de lo expuesto, se emiten los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se **aprueba la ampliación del periodo de reserva** del expediente administrativo número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0010-2018**, que contienen los actos u omisiones circunstanciados por los Inspectores Federales en el acta de inspección número **ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/AI/0010/2018**, **hasta por tres**



años adicionales, de conformidad con lo expuesto en la parte Considerativa de la presente Resolución en virtud de que subsisten las causas que dieron origen a la clasificación de la información como reservada como lo señala la **DGSIVEERC**, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 113, fracción XI de la LGTAIP y el artículo 110, fracción XI y 99 de la LFTAIP, acorde a los elementos para la prueba de daño previstos en el artículo 104 de la LGTAIP de la LFTAIP, en relación con los Lineamientos Trigésimo y Trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Técnico del Comité de Transparencia a notificar por medio electrónico, la presente Resolución a la **DGSIVEERC** adscrita a la **USIVI** de la ASEA.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia de la ASEA, el 10 de octubre de 2019.

Mtra. Ana Julia Jerónimo Gómez.

Suplente de la Presidenta del Comité de Transparencia de la ASEA.

Mtra. Luz María García Rangel.

Suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Comité de Transparencia de la ASEA.

Lic. Sergio Camacho Mendoza.

Coordinador de Archivos en el Comité de Transparencia de la ASEA.

JMV/CPMG